

*De ahí que se estima infundada la resolución constitucional ahora impugnada mediante el presente recurso de revisión.

*Lo cierto es que el Magistrado responsable, elaboró un análisis exhaustivo no solo del ámbito competencial, sino del caudal probatorio existente en actuaciones así como de la dinámica de los hechos circunstanciales se puso de manifiesto que el implicado ahora quejoso, se vio involucrado por los hechos con apariencia del delito y

Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, previsto en el diverso artículo 27 de la misma legislación, **bajo la agravante** contemplada en el artículo 32, fracción V, de la referida Ley especial.

De tal suerte que, en el caso, resulta prudente que el Tribunal constitucional niegue el amparo y protección de la justicia de la unión al quejoso.

*Ahora bien en otro orden de ideas, se considera aplicable al caso, en lo conducente el criterio jurisprudencial aludido bajo el rubro: **"COMPETENCIA TERRITORIAL DE EXCEPCIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 10, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, SI LOS MOTIVOS QUE SIRVIERON PARA SU JUSTIFICACIÓN NO PERSITEN O SE DESVIRTÚAN, EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE DECLINARLA A FAVOR DEL QUE CONSIDERE COMPETENTE."**

Esto es, se itera en la especie, **no fueron desvirtuados los motivos que sirvieron para justificar la competencia territorial por excepción** prevista en el tercer párrafo, del artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, por las razones expuestas en párrafos que anteceden, y por ende, persisten motivos fehacientes para sostener la competencia del Magistrado responsable.

investigador, porque de lo contrario generaría incertidumbre en el debido proceso y en la administración de la justicia.

TERCERO. Por otra parte, el hecho de que el Tribunal responsable haya afectado la esfera jurídica del impetrante de garantías, al haber decretado orden de aprehensión en su contra, no significa que por ello se hayan violado sus derechos humanos, porque el Magistrado actuó de manera exhaustiva y congruente, no solo en estimarse competente para conocer de la apelación que le tocó resolver, pues lo hizo en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y dicho órgano constitucional que resolvió el referido amparo no hizo pronunciamiento alguno sobre cuestiones de incompetencia de la responsable, de ahí que no exista razón fundada para haber otorgado el amparo al quejoso en el sentido de que se decline la competencia a favor de otro Tribunal Colegiado de Apelación en el caso al Tribunal Colegiado de Apelación del Décimo Tercer Circuito, con residencia en San Bartolo, Coyotepec, en el Estado de Oaxaca, argumento del todo infundado, y si la responsable no resolvió conforme las pretensiones del quejoso, no significa que se transgreda el principio Pro Persona.

Sirve de apoyo la Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 25, Octubre de 2013, Tomo II, Materia Penal, Décima Época, visible en la página 906, del contenido siguiente:

"PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO

JOSEFINA CALVILLO TELLO
70.61.66.20.65.6e-66.00.00.00.00.00.00.00.02.65-1
2608 23 14:03:35

Resulta aplicable por identidad jurídica la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Segunda Parte-2, Materia Penal, Octava Época, visible en la página 643, del contenido siguiente:

"SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL NO OBLIGA AL

del juicio constitucional a suplir la deficiencia de la queja en materia penal, ello sólo significa que debe perfeccionar los conceptos de violación formulados en la demanda, pero en manera alguna está obligado a apreciar las constancias de autos, de forma tal que tenga que fallar aun en contra de lo probado en ellas, a fin de conceder el amparo”.

Asimismo, aplicable por identidad jurídica la jurisprudencia por contradicción de tesis, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 2011, Tomo III, Materia Penal, Primera Parte, Novena Época, visible en la página 551, del contenido siguiente:

“SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN LA APELACIÓN EN MATERIA PENAL. De conformidad con lo dispuesto en los Códigos de Procedimientos Penales de las diversas entidades federativas que contengan similar disposición, ante la falta total o parcial de agravios en la apelación, cuando el recurrente sea el reo o su defensor, o siéndolo también en ese supuesto el Ministerio Público, hubieren resultado infundados los agravios alegados por este último, el tribunal revisor cumple con la obligación de suplir la deficiencia de la queja, al hacer suyas y remitir a las consideraciones, razonamientos y fundamentos de la sentencia de primer grado, al no advertir irregularidad alguna en aquella, que amerite ser suplida, lo que significa que la misma se encuentra ajustada a derecho, sin que sea necesario plasmar en su resolución el análisis reiterativo de dichos fundamentos que lo llevaron a la misma conclusión”.

De igual forma, aplicable por identidad jurídica la jurisprudencia por contradicción de tesis, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Materia Penal, Novena Época, visible en la página 224, del contenido siguiente:

“SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN LA APELACIÓN EN

SEPTIMA CUALTIDAD
2011-2012
2011-2012
2011-2012

cumple con la obligación de suplir la deficiencia de la queja, al hacer suyas y remitir a las consideraciones, razonamientos y fundamentos de la sentencia de primer grado, al no advertir irregularidad alguna en aquella, que amerite ser suplida, lo que significa que la misma se encuentra ajustada a derecho, sin que sea necesario plasmar en su resolución el análisis reiterativo de dichos fundamentos que lo llevaron a la misma conclusión".

Ahora bien, tal **suplencia** no llega al extremo de admitir un recurso como en el caso de apelación fuera del plazo que para tal efecto la norma adjetiva así lo establece.

Cobra vigencia, por identidad jurídica la Jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo II, Materia Penal, Octava Época, visible en la página 591, que dice:

"SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL, LÍMITES DE LA.- Si bien el Juez de Distrito tiene la facultad de suplir la deficiencia de la queja en términos del artículo 76 bis, fracción II de la Ley de Amparo, tal facultad se constriñe a la mera **suplencia** de argumentos no expresados en la demanda de garantías, o en su caso, en el escrito de revisión, es decir, se reduce al perfeccionamiento de conceptos de violación o de agravios, llegando al grado de esgrimirlos a pesar de que en la demanda o en el escrito de revisión hubiera ausencia de unos u otros; pero tal **suplencia** no llega al extremo de recabar pruebas de oficio y mucho menos a declarar la inconstitucionalidad de un auto de formal prisión sin prueba alguna".

También aplicable por identidad jurídica la Jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo II, Materia Penal, Octava Época, visible en la página 590, que dice:

972

76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, en materia penal debe suplirse la deficiencia de la queja en favor del peticionario de garantías, tal suplenia sólo faculta a la potestad federal a corregir errores en la cita de preceptos violados y a intervenir de oficio en el análisis del amparo haciendo valer los conceptos que a su juicio sean o conduzcan al conocimiento de la verdad, pero no puede liberar al quejoso de solicitar aquello que sólo a él le corresponde pedir, como en el caso es solicitar el diferimiento de la audiencia constitucional”.

*En todo caso la resolución constitucional que ahora se recurre, afecta al principio de congruencia que debe prevalecer en toda resolución judicial, conforme al contenido de los artículos 74 y 75 de la Ley de Amparo.

Resulta aplicable al caso por identidad jurídica, lo dispuesto por el criterio Jurisprudencial publicado en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Enero de 1991, Octava época, pág. 362, que a la letra dice:

“PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, DEBE PREVALECER EN TODA RESOLUCIÓN JUDICIAL. En todo procedimiento judicial debe cuidarse que se cumpla con el principio de congruencia planteada, que en esencia está referido a que la sentencia sea congruente no sólo consigo misma, sino también con la litis, lo cual estriba en que al resolverse dicha controversia se haga atendiendo a lo planteado por las partes, sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni contener consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos”.

Así como también, sirve de sustento legal por similitud jurídica, la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época. Volumen 71, Cuarta Parte. Pág. 43, de rubro y texto siguientes:

juzgador debe encuadrar en el derecho que les sea aplicable, según el resultado del examen de las pruebas rendidas para demostrarlos. La sentencia que resuelve que el actor no probó los hechos constitutivos de la acción intentada en su demanda, y absuelve a la parte demandada de las prestaciones reclamadas, podrá ser el resultado de una incorrecta apreciación de las pruebas rendidas en el juicio; pero dicha sentencia no será incongruente, si no altera los hechos de la litis ni cambia la causa de pedir invocada en los escritos que la forman".

*Por otra parte, también se viola el **principio de exhaustividad**.

Al respecto, cobra vigencia por identidad jurídica la tesis, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Mayo de 2005, Materia Común, Novena Época, visible en la página 1397, con el rubro y texto siguientes:

"ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE EXHAUSTIVIDAD Y CONGRUENCIA CORRELATIVOS A ESE DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. La administración de justicia que como derecho público subjetivo establece el artículo 17 constitucional, se ve cada vez más distante por los siguientes motivos: A. El gran cúmulo de asuntos que día con día ingresan para su resolución a los tribunales del Poder Judicial de la Federación; B. Los extensos planteamientos que formulan las partes, apoyadas por la modernidad de las computadoras, que si bien han venido a representar herramientas valiosas de trabajo, generan el inconveniente de que esa facilidad se utilice para prolongar textos que abultan tales planteamientos, y que deben atenderse ya sin facilidad, pues con las transcripciones que el estilo de las sentencias exige, y con la dificultad que implica dar respuesta a esa extensa diversidad de alegaciones, se provoca que también los fallos se tornen extensos; C. La tendencia a convertir las **resoluciones** judiciales en tratados teóricos de derecho, olvidando que la academia (la teoría) corresponde a las universidades, mientras que la función propia de los órganos del Estado

expresa absolutamente todos los tópicos plasmados por las partes, renglón a renglón, punto a punto, a pesar de que muchos de ellos no revelen una seria intención de defensa, sino abrir un abanico de posibilidades para ver cuál prospera, con el grave riesgo para el juzgador de incurrir en alguna omisión que potencialmente puede generar la promoción de queja administrativa ante el Consejo de la Judicatura Federal, cuya rendición de informe y atención genera a su vez más carga de trabajo y consumo de tiempo, factor fatal que se vuelve en contra. Por lo tanto, las partes en sus planteamientos y los tribunales en sus sentencias deben dar las pautas para buscar el valor justicia, es decir, no debe caerse en el extremo de que absolutamente todo quede escrito, sin mayor esfuerzo del intelecto para llegar al punto final, pues como lo apuntó el ilustre Barón de Montesquieu, no se trata de hacer leer sino de hacer pensar [recurrir a la "retórica" en su sentido fino (argumentar para justificar y convencer) y no peyorativo (hablar por hablar o escribir por escribir)], lo que implica entonces, que los fallos deben dictarse para resolver litigios, hacer justicia, atender los planteamientos serios de las partes, razonar para justificar y convencer, y para hacer pensar, no para hacer leer, de manera que agotando esos extremos, pueda afirmarse que se cumplen a cabalidad los principios de exhaustividad y **congruencia** correlativos a la satisfacción del servicio público de administración de justicia".

Sirve de apoyo la Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 25, Octubre de 2013, Tomo II, Materia Penal, Décima Época, visible en la página 906, del contenido siguiente:

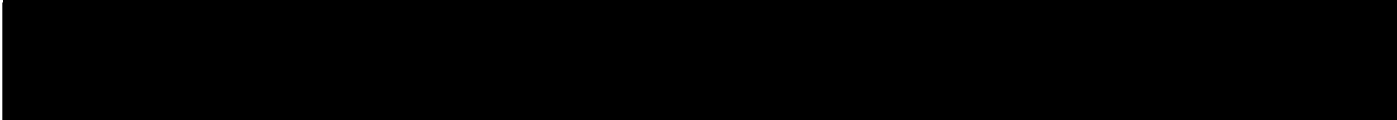
"PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ESTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia

974

Por lo anteriormente expuesto y fundado, a Ustedes C.C. Magistrados, respetuosamente:

PIDO:

PRIMERO.- Se tenga a esta Representación Social de la Federación interponiendo en tiempo y forma, el **Recurso de Revisión** en contra de la resolución constitucional dictada el veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, por el Magistrado Ricardo Delgado Quiroz del Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Tercer Circuito, dentro del Juicio de Amparo 73/2023, notificada a la suscrita el veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, de ahí que, se solicita al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito en turno, sirva **REVOCAR** la resolución constitucional en su punto **SEGUNDO** resolutivo, vinculante a su **SÉPTIMO. CONCLUSIÓN** considerativo.



SEGUNDO. - En su oportunidad se me expida copia certificada de la resolución que se dicte en la presente revisión, de conformidad en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en relación con el artículo 2° de la Ley de Amparo.

ATENTAMENTE.

Guadalajara, Jalisco, a 11 de Abril de 2023.
**LA C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA
FEDERACIÓN DE LA ADSCRIPCIÓN.**





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:
4348002000000000022758821.p7m
Autoridad Certificadora:
Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal
Firmante(s): 1

		Validez:	BIEN	Vigente
		Revocación:	Bien	No revocado
		Status:	Bien	Valida
Fecha: (UTC/ CDMX)	12/04/23 00:16:34 - 11/04/23 18:16:34			
Algoritmo:	RSA - SHA256			
Cadena de firma:	98 22 f1 89 5a ea 04 67 9a e7 a5 24 e7 9e 9a 69 1c ab 60 b6 55 ee de 3a a1 d0 ec eb 49 f5 eb e7 1e 1e e3 bd 49 36 1a da a5 57 d5 c2 b7 c2 16 f1 9c d0 7f 00 b5 a1 eb ac e3 3b 68 c7 f6 04 d9 90 f5 8d 56 0c 56 53 8f 5b 40 5d e8 9b 62 42 ca e5 86 75 b7 85 31 f6 16 b6 5c bf 8c 3c 5f 19 78 86 73 9a 23 4a d8 db 8b 92 89 3b 68 5b bb b1 8f db 2f c2 47 a8 9a c5 f5 70 d6 56 f3 c2 7c b3 14 88 3f aa 5e e7 f1 9e 7b c3 d5 a6 91 d1 4c 57 ee de 2d 3f 50 53 bf b8 0f 18 d4 90 16 8c d6 7b 53 b9 40 3d e4 b7 ca ca bc df 7c d0 cb c1 1b 3f 00 2c 86 c8 f4 ee 83 09 bb 4a 31 fe 89 e6 29 ab 90 b2 fd 05 9e 0d 88 8c d7 db 94 21 cc 21 de 01 a0 aa a3 f2 80 97 17 b7 2e a6 b2 8e e8 de a4 62 39 e1 fc 94 d1 f1 3c 70 19 ee 1a 3f b6 d1 19 fb 04 2a b3 6f ae bd c7 e8 ef 50 3d ce 4e 88 46 df f8			
OCSP				
Fecha: (UTC / CDMX)	12/04/23 00:16:35 - 11/04/23 18:16:35			
Nombre del respondedor:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70,6a,66,20,63,6a,66,03			
TSP				
Fecha : (UTC / CDMX)	12/04/23 00:16:34 - 11/04/23 18:16:34			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	61220891			
Datos estampillados:	Isk2NBK2Vx6OcJxujdAQgdYyIY=			

976

Asunto: ACUERDO DE C.P. 1/2020.
Datos adjuntos: doc10202820230606162702.pdf

BUENAS TARDES MAESTRA:

Envío acuerdo notificado en esta fecha, dentro de la causa penal 1/2020.
Reciba cordial saludo.

ATENTAMENTE

